LA "PRIORIDAD NACIONAL" DE VOX

Por Mamerto Ticse (*)



https://www.alcalahoy.es/2026/04/25/prioridad-nacional-o-el-arte-de-explicar-lo-mismo-de-dos-maneras-distintas-sin-que-se-note-demasiado-por-pedro-enrique-andarelli/

La extrema derecha europea ha encontrado una nueva fórmula para presentar sus viejas ideas reaccionarias: defender a los nacionales frente a los extranjeros, proteger a los de dentro frente a los de fuera y reservar los recursos públicos para quienes considera que pertenecen legítimamente a la nación. El partido neofascista español Vox denomina a esta política «prioridad nacional». Detrás de una expresión aparentemente razonable se esconde una cuestión política de enorme trascendencia: ¿quién tiene derecho a disfrutar de los servicios públicos, las ayudas sociales y las oportunidades de una sociedad? ¿Y quién decide quién merece más?

El planteamiento de Vox parte de una idea sencilla: los españoles deben tener preferencia frente a los inmigrantes en el acceso a determinadas ayudas, viviendas y prestaciones públicas. El partido presenta esta propuesta como una defensa de los trabajadores, las familias y los ciudadanos que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Es un discurso que resulta atractivo para quienes sufren la precariedad laboral, el encarecimiento de la vivienda, las listas de espera sanitarias o la insuficiencia de los servicios públicos.

Sin embargo, debemos preguntarnos por las causas de esos problemas. ¿La falta de viviendas asequibles se debe a la presencia de inmigrantes o a la insuficiencia de vivienda pública, a la especulación inmobiliaria y a un mercado que convierte un derecho básico en un negocio? ¿La precariedad laboral es consecuencia de la inmigración o de unas relaciones económicas que permiten a las empresas reducir costes y debilitar a los trabajadores? ¿Las dificultades de la sanidad pública se resuelven enfrentando a quienes necesitan atención médica o exigiendo más recursos para el sector y una gestión orientada al interés colectivo?

Vox desplaza el centro del debate. En lugar de enfrentar las desigualdades desde sus causas económicas y sociales, propone establecer una jerarquía entre quienes viven en el mismo país. El trabajador español y el trabajador extranjero, que pasan por las mismas dificultades, aparecen, así como competidores por unos recursos supuestamente escasos. Mientras tanto, las responsabilidades de quienes concentran la riqueza, especulan con la vivienda o se benefician de la precarización laboral quedan relegadas a un segundo plano.

La prioridad nacional convierte, de esta manera, un conflicto social en un conflicto de pertenencia. Ya no se pregunta por qué existen tantas

personas sin vivienda digna, sino quién merece recibirla antes por su nacionalidad. No se discute cómo garantizar derechos para todos, sino cómo distribuir la escasez dividiendo a las personas en ciudadanos de primera y de segunda clase

Vox no ha inventado esta estrategia. Forma parte de una corriente internacional que combina nacionalismo, rechazo a la inmigración y promesas de protección social reservada preferentemente a la población autóctona.

En la base de esta concepción está ese sentimiento atávico de los seres humanos de temer al otro, al extranjero, al desconocido, al que habla otras lenguas, al que tiene otros dioses. En su libro "The Clash of Civilizations" el politólogo estadounidense Samuel Huntington avanzó su teoría de que los conflictos globales ya no tendrían bases políticas, ideológicas o económicas, sino que opondrían a grandes campos culturales como el chino, el japonés, el hindú, el islámico, el occidental, el latinoamericano o el africano. De aquí no hubo más que un paso a la tesis reaccionaria del francés Renaud Camus que popularizó la teoría de la «gran sustitución» (Le Grand Remplacement) según la cual las poblaciones europeas de origen estarían siendo sustituidas progresivamente por poblaciones inmigrantes, especialmente musulmanas, debido a la inmigración y a los cambios demográficos, idea que se ha convertido en una de las principales referencias ideológicas de la extrema derecha europea..

En Francia, el Rassemblement National de Marine Le Pen ha defendido durante años la llamada priorité nationale, una política que pretende dar preferencia a los franceses frente a los extranjeros en determinados ámbitos laborales y sociales. El mensaje se acompaña de una denuncia de la inmigración como causa de inseguridad, presión sobre los servicios públicos y deterioro de las condiciones de vida. De esta forma, el nacionalismo se presenta no solamente como defensa de la identidad, sino también como protección económica de las clases populares.

En Italia, Giorgia Meloni y Fratelli d'Italia han impulsado una política de nacionalismo conservador, restricciones migratorias y defensa de una identidad nacional definida en términos culturales. Aunque las medidas italianas no son idénticas a las propuestas de Vox, comparten una orientación política: reforzar las fronteras, endurecer las condiciones de entrada y permanencia de los inmigrantes y presentar la pertenencia nacional como un criterio central de la acción pública.

En Hungría, el ya depuesto jefe de gobierno Viktor Orbán ha desarrollado un modelo todavía más consolidado. Su gobierno combinaba nacionalismo, conservadurismo social, restricciones migratorias y ayudas familiares dirigidas a estimular la natalidad entre los húngaros.

La protección de la nación se convierte en argumento para distinguir entre quienes forman parte de la comunidad nacional considerada legítima y quienes quedan fuera de ella. Este modelo demuestra que la extrema derecha no siempre renuncia a las políticas sociales: puede utilizarlas para construir una protección selectiva, vinculada a sus propias ideas sobre nación, familia e identidad.

También en Estados Unidos, el movimiento de Donald Trump ha popularizado el lema America First, «Estados Unidos primero». Aunque no equivale exactamente a la prioridad nacional de Vox, comparte la voluntad de presentar la defensa de los nacionales frente a los extranjeros como eje de la política pública. Las restricciones migratorias, las deportaciones y el endurecimiento del acceso al país se justifican mediante la promesa de proteger los empleos, la seguridad y los recursos de los estadounidenses.

En todos estos casos encontramos una misma operación política: convertir la nacionalidad en una frontera que no solo separa territorios, sino que también pretende ordenar el acceso a oportunidades y derechos dentro de la sociedad.

La cuestión fundamental no es negar que los Estados puedan establecer requisitos legales para acceder a determinadas prestaciones públicas. Los sistemas de protección social tienen normas, y las administraciones deben garantizar su sostenibilidad. El problema aparece cuando la nacionalidad se convierte en un instrumento de discriminación



y se presenta al inmigrante como responsable de las dificultades que padecen los sectores populares.

En España, miles de trabajadores extranjeros desempeñan tareas esenciales en la agricultura, la hostelería, los cuidados, la construcción y otros sectores de la economía. Pagan impuestos y cotizaciones cuando corresponde, sostienen actividades productivas y contribuyen al funcionamiento de los servicios públicos. Sin la mano de obra extranjera, España se iría a la quiebra total.

Frente a esta estrategia, la izquierda debe defender una política social que atienda las necesidades reales de la población, combata la explotación y garantice derechos sin alimentar enfrentamientos entre quienes comparten unas mismas condiciones de vida. Eso significa construir vivienda pública suficiente, regular el mercado del alquiler, reforzar la sanidad y la educación, mejorar los salarios y combatir el fraude fiscal. Significa también exigir a las empresas que respeten los derechos laborales, con independencia del origen de sus trabajadores y controlar el cumplimiento de las leyes laborales.

Sin embargo, no basta con denunciar el discurso de la extrema derecha. Es necesario comprender por qué encuentra apoyo entre personas que sufren problemas materiales reales. Cuando una familia no puede pagar el alquiler, cuando un joven trabaja sin perspectivas de emancipación o cuando una persona mayor espera demasiado tiempo para recibir atención médica, no podemos responderle únicamente con argumentos morales. Debemos analizar por qué dan su voto, a pesar de todo, a Vox o al Partido Popular y debemos ofrecerles soluciones concretas y demostrar que la solidaridad social es más eficaz que la competencia entre nacionalidades.

La prioridad nacional de Vox representa una respuesta regresiva a una crisis social auténtica. En lugar de ampliar los derechos y distribuir de manera más justa la riqueza, propone jerarquizar a quienes necesitan protección. Su parecido con las políticas de otras formaciones ultraderechistas no es casual: forma parte de una estrategia internacional que combina nacionalismo, restricción migratoria y promesas de protección selectiva.

La respuesta democrática y progresista debe ser clara: los recursos públicos han de servir al interés general, las necesidades sociales deben atenderse con criterios justos y transparentes, y ningún trabajador debe ser convertido en enemigo de otro trabajador por su nacionalidad. La verdadera prioridad de una sociedad democrática debe ser acabar con la pobreza, garantizar una vivienda digna y asegurar que nadie quede abandonado. No levantar nuevas fronteras entre quienes ya sufren las consecuencias de la desigualdad.

No olvidemos que, cuando la extrema derecha consigue que los pobres discutan entre sí por las migajas, los ricos y explotadores del país pueden continuar tranquilos. Y esa es, precisamente, la trampa política que la izquierda debe desenmascarar.